

Cesión de los datos de la historia clínica a órganos jurisdiccionales. Informe 36/2004

Historia clínica. Cesión a órganos jurisdiccionales

La consulta plantea si procede la comunicación a la autoridad judicial de los datos que sean solicitados por la misma para su aportación a un proceso o si, por el contrario, es posible oponerse total o parcialmente a dicha aportación, solicitándose del Órgano Jurisdiccional la concreción de los datos que efectivamente son de necesaria aportación, en caso de considerarse por el centro sanitario que la solicitud es genérica.

Dado que la consulta se refiere a datos contenidos en la historia clínica de los afectados, siendo a la misma a la que se circunscriben los cuatro documentos adjuntos a la consulta, en que además, salvo una excepción, se efectúan solicitudes de datos concretos de la historia clínica y no la remisión íntegra de la misma, será preciso analizar si la cesión de los datos de salud del historial a la autoridad judicial resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

El artículo 7.3 de la mencionada Ley Orgánica dispone como premisa general que “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”.

En particular, en el ámbito sanitario, la Ley 21/2000, e la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, de 29 de diciembre, reguladora de los Derechos de información concernientes a la salud y a la autonomía del paciente, y la documentación clínica, guarda silencio sobre esta cuestión en su artículo 12, único referido a la utilización de las historias clínicas.

Sin embargo, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, cuya disposición adicional primera dispone que “Esta Ley tiene la condición de básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.1ª y 16ª de la Constitución”, añadiendo que “El Estado y las Comunidades Autónomas adoptarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para la efectividad de esta Ley”, sí regula, dentro del artículo 16, referido a los usos de la historia clínica, la posible cesión de datos de la misma a la autoridad judicial.

A tal efecto, dispone el artículo 16.3 que “El acceso a la historia clínica con fines judiciales (...) se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 14/1986, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso”.

Sentada esta premisa, se establece como regla general que “El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico-asistencial, de manera que como regla general quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos”.

No obstante, el propio precepto concluye que “Se exceptúan (de la regla anterior) los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínico-asistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso”.

De lo dispuesto en el precepto transcrito se desprende que, con carácter general, siempre que una autoridad judicial considere necesaria la aportación de datos contenidos en una historia clínica, en los términos que el propio Órgano determine, será necesario aportar dichos documentos, pudiendo resultar la decisión de la entidad a que se solicitara la información de no facilitarla o facilitarla parcialmente, contraria a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, a cuyo tenor “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”